

Neoliberalismo y Estado

PEDRO DE VEGA GARCÍA

SUMARIO:

- I. LA FALSA POLEMICA SOBRE EL ESTADO DE BIENESTAR
- II. ESTADO Y MERCADO EN EL PRIMER LIBERALISMO
- III. LIBERTAD POLITICA Y LIBERTAD SOCIAL
- IV. ESTADO Y MERCADO EN EL NEOLIBERALISMO
- V. DEL ESTADO DE BIENESTAR AL BIENESTAR DEL ESTADO

El cuestionamiento neoliberal del Estado de bienestar esconde en realidad una crítica decidida y abierta al Estado, como defensor de la lógica del interés general frente a los intereses individuales y egoístas que operan en el mercado ante la necesidad de contar con la capacidad correctora del Estado, el neoliberalismo actúa intentando cercenar su independencia y minar su prestigio.

I. LA FALSA POLEMICA SOBRE EL ESTADO DE BIENESTAR

Las actitudes a favor o en contra del Estado de bienestar se están convirtiendo, de una forma cada vez más rotunda, en el único punto de referencia de la controversia ideológico-política del presente. Lo que constituye quizás la manifestación más palpable de una doble debilidad. Debilidad, en primer término, del pensamiento conservador que en un ejercicio de simplificación notable, acaba reduciendo los complejos y abigarrados problemas de la vida política y social a un economicismo vulgar, en el que el crecimiento por el crecimiento se presenta como el mito salvador de todas nuestras desventuras.

Pero debilidad y claudicación también del sediente pensamiento progresista que desde la incapacidad o del cinismo, se sitúa en la discusión dando por buenos unos planteamientos a todas luces inadmisibles. Cuando se acepta que el fundamental problema del Estado de bienestar es un problema de recursos y de escasez, y no de distribución, la mística del crecimiento, la ortodoxia de las economías de la oferta y la sacralización de la racionalidad tecnocrática, propias del arsenal teórico conservador, tienen que pasar por fuerza, como lógica e inevitable consecuencia, a integrar el pensamiento político de la izquierda.

Encerrada de esta suerte la polémica política en el ámbito del crecimiento y de los números, el debate y la diferenciación ideológica no podrán ir más allá de la mera discusión cuantitativa sobre la aceptación o el rechazo de mayores o menores niveles de inflación, de déficit, de desempleo, o de reducción de las prestaciones sociales. Con lo cual, la discusión sobre el Estado de bienestar se transforma en un espléndido pretexto para ignorar y silenciar los más graves, auténticos y decisivos interrogantes políticos que presiden la crisis histórica en la que vivimos y cuyo planteamiento, en una procaz impostura, se pretende eludir.

Es verdad que la crisis del Estado de bienestar estalla como un problema de recursos y de escasez. Pero no lo es menos que lo que tras ella se esconde es la tremenda cuestión de cómo compaginar la lógica del Estado, que es la lógica del interés general, con la lógica del mercado y la competitividad, que no deja de ser la lógica de los intereses individuales y egoístas de los particulares. Lo que significa que el interrogante a resolver no es otro que el de ¿cómo compaginar el logro de los intereses particulares con la satisfacción de los intereses generales en una situación definida por la mundialización, la expansión y el predominio del mercado, y en la que el Estado pierde cada vez de forma más alarmante su protagonismo?

II. ESTADO Y MERCADO EN EL PRIMER LIBERALISMO

En la confrontación entre Estado y mercado, la posición del primer liberalismo fue contundente y clara. El fisiócrata Mercier de la Riviere la formuló con rotundidad: «*El Estado —escribió— es la fuente de todos los males del hombre sobre la tierra*». En consecuencia, era en la mano invisible del mercado, de la que hablara Adam Smith, y no en el Estado, en la que los hombres debían confiar para resolver sus problemas. De todos es conocido el lema de los fisiócratas: «*hay que dejar hacer, dejar pasar que el mundo va por sí mismo*».

La primacía indiscutible del mercado condujo así a forjar la imagen del Estado abstencionista que, como mero vigilante del orden, debía quedar comprimido en una raquílica estructura. Lo que menos importa recordar ahora son los fracasos, injusticias y desastres provocados, a lo largo de la pasada centuria, por el libre juego de la oferta y la demanda en un mercado sin regulación de ningún tipo, o la inmensa falacia y la enorme contradicción que suponía preconizar la existencia de un Estado débil, al tiempo que se potenciaba su fuerza para declarar guerras y establecer imperios que asegurasen la expansión de las economías nacionales. Lo que interesa constatar tan sólo es el hecho de que, conciente de las contradicciones y limitaciones de los planteamientos iniciales,

el pensamiento político liberal supo rescatar pronto la categoría *Estado*, y, desde un constructivismo ético evidente, elaborar una doctrina del interés general cuyas virtudes nadie puede negar.

Fue desde ese rescate del Estado por un sector dignísimo del pensamiento liberal, que se perpetúa con honestidad y brillantez en la actualidad en obras como la de John Rawls (*El liberalismo político*), desde donde pudo establecerse, el marco jurídico del Estado Constitucional, uno de esos grandes pactos tácitos que a veces la historia impone entre fuerzas conservadoras y fuerzas progresistas, y del que surgió la creación del Estado de bienestar.

La tensión, sin embargo, en el presente entre las exigencias del mercado y los requerimientos del Estado como instancia del interés general, que en definitiva es lo que late y se esconde detrás de la cacareada crisis del Estado de bienestar, ha conducido de nuevo al conservadurismo más radical y retrógrado a los planteamientos del primer liberalismo. John Rawls y muy pocos más, entre los llamados neo-contractualistas, son extrañas excepciones en una atmósfera intelectual en la que la crítica del Estado de bienestar se transforma sencilla y llanamente en la crítica abierta y decidida al Estado. Frases como la de Hayek, quien no duda en proclamar que *«la acción del Estado es el mejor camino hacia la esclavitud»*, o la de Beneton al afirmar que para *«librarnos de los males y miserias del presente lo que tenemos que hacer es librarnos de esa plaga del bien que es el Estado de bienestar»*, constituyen testimonios elocuentes de una actitud cada vez más generalizada y hostil hacia la realidad estatal.

III. LIBERTAD POLITICA Y LIBERTAD SOCIAL

Dos son los supuestos sobre los que el neoliberalismo hará girar básicamente su argumentación. Conforme al primero, y haciendo suya la vieja consideración fisiocrática de la sociedad como el reino del bien y de la libertad, procederá a la condena del Estado como su mayor enemigo y su más peligrosa amenaza. Conforme al segundo, en nombre de una racionalidad instrumental y tecnocrática, se ensalzaran las ventajas y rendimientos del mercado frente a los desastres y desmanes que propicia la intervención estatal en la economía.

Aunque no sea el momento de discutir en detalle las múltiples falacias del razonamiento neoliberal, sí conviene señalar al menos, con relación a la condena del Estado como el gran peligro de la libertad algo que parece evidente. Es verdad que el Estado, el poder político, constituye un gran riesgo para la libertad. Lo ha sido siempre. No obstante, no deja de ser sorprendente y contradictorio que cuando el Estado constitucional moderno cimenta su estructura en unos mecanismos limitadores y controladores del poder, establece un sistema de derechos del ciudadano y articula un conjunto de garantías jurídicas sin precedentes en la historia, sea cuando, precisamente en nombre de esa libertad que el mismo Estado quiere garantizar, se pronuncie su irremediable condena.

El hecho resulta tanto más paradójico y extraño si se piensa que lo que se contrapone a ese Estado, al que se vitupera y ataca como el gran enemigo de la libertad

social, es la sociedad corporativista de nuestros días presidida por la acción de unos poderes privados que, como cualquier otro tipo de poder, constituyen una amenaza para la libertad tan grave y peligrosa como la que representa el propio Estado. Con su habitual lucidez, ha descrito Norberto Bobbio esta situación con las siguientes palabras: *«No importa que el individuo sea libre políticamente si después no es libre socialmente. Por debajo de la “no libertad”, como sujeción al poder del príncipe, hay una “no-libertad” más profunda... y más difícilmente extirpable: la “no-libertad” como sumisión al aparato productivo y a las grandes organizaciones del consenso y del disenso que la sociedad corporativa inevitablemente genera en su seno. El problema actual de la libertad no puede restringirse ya al problema de la libertad del Estado y en el Estado, sino que afecta a la misma organización de la sociedad civil. Afecta, no al ciudadano en cuanto tal, esto es, al hombre público, sino al hombre entero en cuanto ser social».*

Preconizar en una situación como ésta la eliminación del Estado como único medio de defensa de la libertad, olvidando la “no-libertad” que la sociedad corporatista genera en su seno, constituye, en el mejor de los casos, una muestra de torpeza, y, en el peor, un colosal ejercicio de cinismo.

IV. ESTADO Y MERCADO EN EL NEOLIBERALISMO

Otro tanto cabría aducir con relación al segundo supuesto por el que discurre la argumentación neoliberal. Cuando se diviniza el mercado y la libre competencia, como criterios racionalizadores de la vida productiva, y frente a ellos se sitúan los desastres y desmanes que genera la intervención estatal en la economía, lo que intencionadamente se olvida es que el mercado no funcionó nunca sin los correctivos y los apoyos del Estado.

O'Connor denunció en su día, en su memorable obra sobre la *Crisis fiscal del Estado*, las ambigüedades y contradicciones de un discurso que, por una parte, apelando a la racionalidad del mercado, no duda en solicitar disminuciones de impuestos, pedir la supresión de las disposiciones reguladoras del empleo o reclamar la parálisis estatal en la acción asistencial, al mismo tiempo que, por otro lado, no renuncia a acudir al Estado en demanda de auxilio para empresas en bancarrota destrozadas por el propio sistema de mercado.

La contradicción, sin embargo, más evidente y más grave en la contraposición realizada por el neoliberalismo entre el mercado y el Estado, es la que se produce cuando las disfuncionalidades internas y los conflictos sociales anexos a la vida del mercado ponen en peligro su propia existencia. Para asegurar su supervivencia estructural el mercado necesita, como es obvio, un mínimo de orden social sin el cual no puede funcionar. Es en este contexto en el que hablan ahora con tanto empeño los economistas y los políticos de la confianza como requisito previo para el crecimiento económico. Dejó el primer liberalismo resuelto el problema con la apelación a la creencia derivada del racionalismo ilustrado según la cual se entendía que de igual manera que existe un orden natural en el mundo físico, existe un orden natural en el mundo económico y social. El mercado pudo presentarse así, sin escándalo de ningún

tipo, como la expresión directa e inmediata de ese orden natural, mientras que el Estado aparecía como su gran perturbador.

Nadie en su sano juicio, ni siquiera los más ingenuos neoliberales, se atreverían a recurrir en nuestros días, después de dos siglos de experiencias lamentables, a la doctrina del orden natural como lo hicieron los fisiócratas. Por el contrario, es opinión generalmente compartida que el mercado, que ha demostrado sus enormes capacidades para producir conflictos sociales, ha patentizado igualmente su absoluta incapacidad para resolverlos. Si Hegel delató en su momento las tensiones, luchas y disputas encarnizadas que conmovían el orden y la tranquilidad de la teóricamente pacífica sociedad civil, los economistas de los costos de transacción (Williamson, Ouchil), denuncian ahora la aparición de la violencia y el traslado del modelo mafioso de los clanes al ámbito del mercado como mecanismos necesarios para poder culminar múltiples transacciones comerciales.

En estas circunstancias, ante la amenaza de conflictos sociales que el mercado no puede resolver ni soportar, y ante el riesgo permanente del caos interno, nada tiene de particular que se haga imprescindible recurrir al Estado como instrumento de regulación y control, por ser la única instancia capaz de crear las condiciones para que el sistema económico obtenga la mínima «lealtad de las masas» (Offe), sin la que su funcionamiento resultaría imposible. Es entonces cuando el neoliberalismo emprende con descaro la gran operación de taumaturgia política de recuperar al Estado, no sólo como aparato represor que resuelva los conflictos y tensiones sociales que el mercado inexorablemente genera, sino, además, como instrumento de legitimidad y de consenso que los evite.

Ni qué decir tiene que, en esa operación obligada de recuperación del Estado, no se trata tanto de acudir a los buenos oficios de una organización política capaz de hacer valer los intereses generales y los principios de la igualdad y la justicia, como de construir un aparato que, garantizando la paz social necesaria para que el mercado funcione, actúe de ángel custodio de los intereses egoístas y particulares que en el mercado se desarrollan. De esa forma no es el Estado el que se presenta como instancia del interés general, sino que son los intereses particulares y los poderes privados los que terminan colocando al Estado a su servicio.

V. DEL ESTADO DE BIENESTAR AL BIENESTAR DEL ESTADO

La falsa identificación que comporta este singular ejercicio de malabarismo ideológico y político entre los intereses del mercado y los intereses del Estado, y que consagró el americano Wilson con aquella célebre frase de que «*lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos y viceversa*», no deja, como es obvio, de tener sus costos y de implicar sus sacrificios. Para empezar supone la inverecunda y definitiva renuncia a cualquier tipo de constructivismo ético en el ámbito de la política y del Estado, haciendo buenas aquellas visiones depredadoras del mismo que sólo lo explican como instrumento de dominación al servicio de los grupos dirigentes. Pero implica además el distanciamiento y el abandono de la política de masas de población cada vez más numerosas. Lo que determina el tránsito del Estado de

bienestar a lo que con feliz hallazgo semántico Farías García ha denominado el Bienestar del Estado.

Concientes los intereses privados que operan en el mercado del imperioso deber de recurrir al Estado, y a la vez, de la conveniencia de impedir en lo posible que el Estado se convierta en articulador y representante de otros intereses ajenos a los suyos. Orientarán su acción desde un doble objetivo. En primer lugar, procurando predeterminar y controlar toda la actividad de los poderes públicos, y en segundo término, cercenando en lo posible su independencia y minando su prestigio. Para ello no basta ya con contraponer a la razón política la razón instrumental y tecnocrática de la eficacia. A la altura de los tiempos que vivimos, los argumentos de Bell en *El Fin de las Ideologías* de Burham en *La Revolución de los técnicos*, o de Fukuyama en *El fin de la historia*, han dejado de ser operativos. De lo que se trata ahora es de satisfacer las ambiciones de los aparatos y las nuevas nomenclaturas, y asumir como costos en las partidas de gastos de los agentes del mercado, las cantidades que los protagonistas políticos soliciten o estén dispuestos a aceptar, con tal de que lo único que no reclamen ni planteen sean las exigencias y requerimientos que pudieran derivar de su condición de representantes del interés general.

Los escándalos y corrupciones que aparecen por doquier, y el deterioro generalizado de la política en el mundo entero, habría que interpretarlos desde esta perspectiva como fenómenos estructurales que van más allá de debilidades personales y miserias de la naturaleza humana. Fenómenos mucho más profundos y más graves que el de la propia crisis del Estado de Bienestar, y ante los cuales, la mayoría de los profesionales de la política reaccionan creando lo que se ha dado en llamar «el marco del pensamiento único», para decretar al unísono desde él el bienestar del Estado.

Contemplamos de este modo el singular y patético espectáculo en el que según los cánones de «lo políticamente correcto», la primera misión del político se ha convertido en proclamar a los cuatro vientos que el Estado goza de buena salud mientras se debate en agónicos estertores. Lo que no tendría mayor importancia si no fuera porque esta portentosa escenificación teatral de la política no sólo no despierta demasiados entusiasmos en la ciudadanía, sino que además alarmante y peligrosamente se queda sin espectadores.